

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 16 de septiembre del año pasado comparece el abogado don Juan Pablo Oyarzún Medina, quien en representación de la Fundación Educacional Colegio Notre Dame y, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta PA N° 00835, dictada por el Fiscal (S) de la Superintendencia de Educación con fecha 30 de agosto de 2023, que rechazó el recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0807, de 26 de abril de 2023, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, que aprobó un proceso administrativo y aplicó a la reclamante la sanción de multa a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Pese a la poca claridad de la narrativa que efectúa el reclamo, es posible colegir de su relato que con ocasión de una fiscalización que se verificó el día 2 de marzo de 2022, se levantó el acta N°221300431 y que, en razón de las irregularidades de las que ella dio cuenta, el 16 de marzo de 2022, por medio de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/0643, se ordenó instruir un proceso administrativo en contra del establecimiento educacional, para posteriormente el fiscal instructor del procedimiento formular los siguientes cargos:

1.- Sostenedor no da a conocer y/o no mantiene la información exigida por la normativa educacional en los procesos de admisión. Normas transgredidas: Artículo 13 letras a) y e) del D.F.L N° 2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

2.- Establecimiento no garantiza la transparencia del proceso de admisión, pues no publica lista de admitidos. Normas transgredidas: Artículo 14 del D.F.L. N° 2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

3.- Sostenedor no cumple con proceso de admisión que garantice el respeto a la dignidad y/o derechos de los niños, niñas y sus familias.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RSGYXPXCHYK

Normas transgredidas: Artículos 3 letras d), f) y k); 10 letra a); 11 y 13 del D.F.L. N° 2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

Señala, en resumen, que el primer cargo fue subsanado, por lo que a la luz de los principios que inspiran las actuaciones de la Superintendencia de Educación debió dejarse sin efecto, no existiendo ninguna razón que justifique actualmente la sanción; que el segundo cargo, según se indica en la letra f.- del considerando Quinto de la propia resolución impugnada, debe entenderse cumplido con el mérito del listado denominado “Admisión 2022 Colegio Notre Dame”, que detalla el nombre y el apellido de los estudiantes admitidos, junto con el correspondiente curso, haciendo presente que respecto del proceso de admisión para el año 2022, que se efectuó en el año escolar 2021, no es posible esperar que la información relativa a el, de hace más de dos años atrás, continúe en la página web del colegio publicada en el año 2023, para así cumplir con los requerimientos excesivos del sentenciador; y que el tercer cargo fue también subsanado con posterioridad a la fiscalización, por lo que la multa impuesta a su respecto carece de toda justificación.

Solicita, en definitiva, a esta Corte que se “...*enmiende la resolución indicada y, en definitiva, declare que se revoca, absolviendo al sostenedor de la sanción aplicada*”;

SEGUNDO: Que evacuando informe, comparecen los abogados don Juan Esteban Cayuqueo Zepeda y don Nicolás Andrés Jorge Romero Silva, ambos en representación de la Superintendencia de Educación, quienes solicitan el rechazo de la presente reclamación.

En lo referente al primer cargo, señalan que no existe contradicción alguna o vicio de ilegalidad en la resolución recurrida que afinó el proceso sancionatorio cuando pondera y confirma la aludida imputación, no obstante tenerlo por corregido, ya que la razón del mismo fue que la información no fue publicada al momento de la convocatoria, constatándose que el establecimiento no tenía disponible, respecto a los ítems requeridos, y que se debían cumplir para dar inicio al proceso de “Admisión 2022”, en la información entregada por el correo institucional del colegio de fecha 27 de diciembre de 2021 y/o en el sitio web oficial del establecimiento: a).- el número de vacantes por cada nivel; y b).- la



fecha de publicación de los resultados.

Pese a la posterior subsanación -que se tuvo en cuenta al momento de imponer la sanción-, se concluyó que ella no desvirtuó el cargo, pues lo cierto es que la información no fue publicada al momento de la convocatoria, esto es, durante el proceso de postulación 2021.

Respecto al segundo cargo, explican que tal como se ha expresado en la resolución recurrida, de fojas 156 a 159 del expediente administrativo, consta el listado denominado “Admisión 2022 Colegio Notre Dame”, en el que se observó que no detalla la fecha, ni otro tipo de verificador que permita acreditar que el establecimiento efectivamente los hubiese publicado en un lugar visible y, opcionalmente, en un medio electrónico disponible a toda la comunidad educativa y, por lo mismo, es que la documentación que fue acompañada en sede administrativa se consideró como un medio no idóneo para tener por corregido el presente cargo. Agregan que luego de formularse éste, la reclamante no efectuó descargos en relación al mismo, ni acompañó prueba alguna para desvirtuarlo, por lo que ante la inactividad procesal y probatoria del recurrente, fue que la Dirección Regional de la Superintendencia procedió fundadamente a confirmarlo, teniendo a la vista la normativa educacional estimada como incumplida, como también los antecedentes recopilados posteriormente en su recurso de reclamación administrativo, concluyendo que fue un hecho asentado que no se encontraba tanto dentro de los antecedentes enviados por correo electrónico, ni en la web oficial del establecimiento, respaldo de la publicación del listado de alumnos admitidos.

Finalmente, en lo que atañe al tercer cargo, refieren que a diferencia de lo que sostiene la reclamante, lo cierto es que el colegio no cumplió con la normativa educacional, tal como lo reflejó el hecho constatado en el documento “Reglamento-ND-2020-correcciones-7.1.2020” y en los instrumentos de convocatoria oficial del proceso de admisión del establecimiento correspondiente al proceso de postulación 2021, admisión 2022.

Lo anterior, por cuanto se verificó que en el caso de que el estudiante tuviese alguna necesidad especial permanente, se solicitaba un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RSGYXPXCHYK

informe de especialistas, lo cual no es posible requerir en el proceso de admisión. De igual manera, en la página web del establecimiento, en su link de admisión, se observó que la ficha de postulación solicitaba antecedentes relativos a la actividad y/o profesión y lugar de trabajo de los padres del estudiante y la religión que profesa la familia, además de solicitar que se indicará si el estudiante ha presentado o presenta necesidades educativas especiales, exigencias que implican posibles discriminaciones arbitrarias dentro del proceso de admisión.

Explican que a raíz de una medida para mejor resolver dispuesta por la propia autoridad, se entendió que el cargo fue posteriormente corregido, pero no desvirtuado, según malentende el recurrente, en tanto lo que se verificó fue solamente una corrección o adecuación posterior a la infracción.

Sostienen, a modo de corolario, que el Servicio ponderó adecuadamente la sanción, ya que se aplicó debidamente el principio de proporcionalidad, definido como aquel límite al margen de discrecionalidad otorgado a los órganos de la administración y, por ende, a la Superintendencia de Educación, el cual se debe tener en cuenta al momento de determinar la sanción aplicable por la comisión de una infracción a la normativa educacional. Copulativamente, también fue realizada la ponderación de las circunstancias contempladas en el artículo 73 letra b), inciso segundo de la Ley 20.529, establecidas con el fin de graduar la sanción en cuestión y que ella resulte pertinente a la naturaleza de las infracciones constatadas. Añaden que, efectivamente, la Superintendencia de Educación en la resolución recurrida tuvo a la vista la circunstancia agravante de responsabilidad del artículo 80, letra c) de la mencionada ley, toda vez que el establecimiento fue sancionado con anterioridad, mediante Resolución Exenta N°2019/PA/13/4806, de fecha 27 de diciembre de 2019, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, circunstancia agravante de responsabilidad que no fue ponderada por la autoridad regional;

TERCERO: Que luego de lo dicho, los argumentos del reclamo en análisis pueden resumirse, aduciendo al efecto que dos de los cargos -primero y tercero-, fueron posteriormente subsanados por la reclamante,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RSGYXPXCHYK

por lo que no debieron ser objeto de sanción; que la acreditación de haber dado cumplimiento al deber que se estimó infringido y que dio pie al segundo cargo es imposible de lograr luego de transcurridos dos años después de la época en que debió satisfacerse dicha obligación; y por la atribuida falta de proporcionalidad e incorrecta aplicación de la multa;

QUINTO: Que a la luz del artículo 85 de la Ley 20.529, la finalidad del arbitrio que se analiza -la cual fija el ámbito de la materia que es competencia de este Tribunal para entrar al conocimiento del asunto específicamente por esta vía-, está dada ante la eventualidad de que frente a un proceso administrativo seguido en contra de algún sujeto por una supuesta infracción que pudiere significar contravención a la normativa educacional, aquél se sienta afectado frente a resoluciones del Superintendente, por no ajustarse aquellas precisamente a dicha “normativa educacional”, referencia de texto que estos magistrados entienden relacionada con las disposiciones sustantivas que se encuentran establecidas en diversos cuerpos legales para asegurar el cumplimiento del deber prioritario del Estado que estatuye el artículo 1° de la Ley 20.529;

SEXTO: Que en primer término, en lo que atañe a las alegaciones que el reclamo plantea respecto de los cargos uno y tres, las que básicamente hace consistir en que luego de constatadas las infracciones a la normativa del ramo, el establecimiento educacional las habría subsanado, lo que incluso ha sido reconocido por la autoridad administrativa, no correspondiendo por ello la sanción impuesta en razón de las mismas, es menester señalar que, si bien es efectivo, que a partir del año 2017, con la finalidad de mejorar sus labores, la Superintendencia de Educación comenzó a implementar el “Modelo de Fiscalización con Enfoque de Derechos y Libertades Fundamentales,” el cual se centra en el resguardo de los derechos, libertades y bienes jurídicos que permiten el aprendizaje de los párvulos y estudiantes, trasladando el foco de las fiscalizaciones desde meros hallazgos de incumplimientos codificados, hacia el resguardo de derechos fundamentales, siendo una de las características centrales de este nuevo modelo la entrega a sostenedores y establecimientos educacionales de la oportunidad de subsanar ciertos incumplimientos de menor gravedad, generando así espacios de aprendizaje y mejora continua, lo cierto es que el



referido modelo de fiscalización contempla que ellas pueden finalizar con cuatro distintos tipos de actas: Satisfactoria, Con Observaciones Subsanables, Con Observaciones Mixtas, y Con Observaciones No Subsanables.

En el caso que nos ocupa, como se lee del acta de fiscalización respectiva de 10 de enero de 2022, se trató de una “Con Observaciones Subsanables”, dejándose constancia en la misma que se otorgó un plazo de 15 días hábiles al establecimiento educacional para subsanar los incumplimientos indicados en ella, lo que se le comunicó al administrado por correo electrónico el día 21 del mismo mes y año. Posteriormente, con fecha 2 de marzo de 2022, en el Acta de Fiscalización de Seguimiento se dio cuenta de que el reclamante no subsanó las observaciones y, al haberse constatado eventuales contravenciones a la normativa educacional, por Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0643, de 16 de marzo de 2022, se instruyó el respectivo proceso administrativo y se designó al fiscal, quien formuló los cargos por los que finalmente se sancionó al reclamante, el 18 de abril de 2022.

Luego de lo anterior, resulta palmario que no puede entender el recurrente que la posibilidad de subsanar las observaciones del fiscalizador, entendida como una forma, de concluir satisfactoriamente la fiscalización administrativa, se extienda más allá del plazo que perentoriamente le fue otorgado al efecto, dado que precisamente en ese evento, las observaciones son derivadas a un proceso administrativo sancionatorio, en el que, en todo caso, se podrá evaluar si una posterior corrección llevada a cabo por el establecimiento educacional ha tenido la capacidad de garantizar los derechos fundamentales, en el caso de marras, de las personas -alumnos y apoderados- que participaron en el periodo de admisión del año 2021-2022, lo que en el particular, no aconteció, pues la subsanación de la observación que motivó el primer cargo, esto es, la completa información exigida por la normativa educacional, vale decir, la incorporación del número de vacantes por nivel, el plazo de postulación y la fecha de publicación de los resultados, no fue comunicada a los interesados oportunamente, ya que sólo se anunció a la comunidad educativa y a los postulantes al colegio que dichos antecedentes se harían públicos a partir de la reapertura del colegio en



febrero de 2022, es decir, en una época en que el establecimiento se encontraba cerrado. Por su parte, la observación que dio pie al tercer cargo, requerimiento de información que podría constituir posibles discriminaciones arbitrarias dentro del proceso de admisión, sólo fue subsanado con posterioridad al proceso de admisión llevado a cabo el año 2021, como acreditó el colegio con el documento denominado “Proceso Admisión 2022”, lo que fue corroborado el 30 de junio de 2023, al revisar la autoridad administrativa, como medida para mejor resolver, la página web del establecimiento educacional;

Lo constatado es suficiente para descartar la presente impugnación en lo que dice relación con la alegación de subsanación;

SÉPTIMO: Que, enseguida, en lo que dice relación con el cargo número dos, lo cierto es que la reclamante no acreditó haber dado cumplimiento a la conducta debida, en orden a haber publicado en un lugar visible y público y, opcionalmente, mediante un medio electrónico, el listado denominado “Admisión 2022 Colegio Notre Dame”, como era de su cargo.

Al respecto, aun cuando la fiscalización se haya verificado un tiempo después -enero de 2022-, lo cierto es que la presunción legal que el artículo 52 de la Ley 20.529 otorga a los hechos constatados por los fiscalizadores no fue desvirtuada por ninguna prueba acompañada por el reclamante;

OCTAVO: Que, finalmente, se desechará también la petición de rebaja de la multa, por haber sido impuesta en el rango legal -mínimo- y conforme a un razonamiento igualmente motivado, de conformidad a lo previsto en el artículo 73 letra b) de la Ley 20.529, que sanciona las infracciones menos graves con multa de entre 51 y 500 U.T.M., calificación ésta última que se adecúa a lo establecido en el artículo 77 letra c) del mismo texto legal, que incluye entre otras contravenciones menos graves, todas aquellas conductas que infrinjan “...*los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave*”, debiendo añadirse a lo anterior que sí se consideraron para establecer el monto de la sanción las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 79 de la aludida normativa, específicamente, la de



subsanción y, también, la agravante consignada en el artículo 80 letra c) del mismo texto legal;

NOVENO: Que, por consiguiente, no advirtiéndose vulneración alguna a la normativa educacional vigente, este arbitrio deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 85 de la Ley 20.529, **se rechaza** el recurso de reclamación deducido por el abogado don Juan Pablo Oyarzún Medina, en representación de la Fundación Educacional Colegio Notre Dame, en contra de la Resolución Exenta PA N° 00835, dictada por el Fiscal (S) de la Superintendencia de Educación, con fecha 30 de agosto de 2023.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Villadangos.

Contencioso N° 596-2023.-

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RSGYXPXCHYK

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F., Jenny Book R. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RSGYXPXCHYK